



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, catorce de julio de dos mil veintitrés

S19-088

Proceso: ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandantes: **RUBIELA CASTILLO AVALO y JAVIER HUMBERTO ARCHILA REINA**
Demandado: **PORVENIR S.A.**
Radicado No.: **05001-31-05-014-2017-00105-01**
Tema: pensión de sobrevivientes – intereses moratorios
Decisión: **CONFIRMA PARCIALMENTE**

Link: [19-088 \(014-2017-00105\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad dentro del proceso de la referencia, además de conocer en el grado jurisdiccional de consulta a favor de uno de los demandantes, al ser totalmente desfavorable la sentencia emitida.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 23** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Mediante demandas presentadas en forma separada, solicitan los demandantes que se condene a Porvenir S.A. a reconocer y pagar la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES causada por el fallecimiento de su hijo JAVIER HUMBERTO ARCHILA CASTILLO, y desde el 25 de noviembre de 2014 fecha del deceso, además de los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

Como hechos comunes, indicaron los accionantes que:

- ✓ Que su hijo Javier Humberto Archila Castillo falleció por causas de origen común el 25 de noviembre de 2014.
- ✓ Que el causante se encontraba afiliado a la AFP Porvenir S.A. para el cubrimiento de los riesgos de vejez, invalidez y muerte.
- ✓ Que en los tres años inmediatamente anteriores al deceso contaba con 66,42 semanas cotizadas.
- ✓ Que solicitaron a PORVENIR S.A. el otorgamiento de la pensión deprecada, petición resuelta de manera desfavorable el día 11 de junio de 2015, aduciendo que no cumplían con el requisito de la dependencia económica.

Por su parte la señora RUBIELA CASTILLO AVALO, señaló que:

- ✓ Que el progenitor abandonó el hogar más o menos 10 años atrás, por lo que desde los 13 años el causante empezó a laborar en una bomba de gasolina con un tío y así contribuía para la comida, mientras que ella trabajaba con lo que resultara en costura.
- ✓ Que ella y su hijo vivían en Puerto Berrio, Antioquia, pero a raíz de la violencia se trasladaron a vivir al Municipio de Envigado, exactamente al barrio la Sebastiana, donde su hija Leidy Johana, para posteriormente los tres mudarse al Municipio de Bello, Antioquia, donde repartían los gastos, su hija pagaba el arriendo y el causante los servicios y el mercado, además de darle lo que necesitara, ropa, medicamentos y dinero para citas médicas.
- ✓ Que a su hijo no le dio para pagar una universidad dado que por lo general percibía un salario mínimo.
- ✓ Que con ocasión de su trabajo el causante se trasladó al Municipio de Ituango, donde laboró entre agosto de 2013 y agosto de 2014, pero cada 12 días que descansaba, retornaba donde ella, y continuaba aportando para los servicios y la alimentación, pues en la empresa le suministraban comida, vivienda y transporte.
- ✓ Que mensualmente el arriendo le costaba \$600.000, los servicios \$300.000 y el mercado \$500.000, aunque ella se ayudaba con algunas ventas de comida afuera de su casa (empanadas, chorizos), sin embargo, cuando faltó su hijo, le tocó empezar a prestar dinero e ir pagando con intereses.

- ✓ Que tiene otra hija llamada Magda, la cual después de la muerte de su hermano le ha tratado de ayudar, aunque tenga sus propias obligaciones y viva en Puerto Berrio.
- ✓ Que Porvenir S.A. le devolvió los saldos de acuerdo con los aportes que reposaban en la cuenta de ahorro individual del causante, en la suma de \$1.392.476.

Por su parte el señor JAVIER HUMBERTO ARCHILA REINA, citado oficiosamente por el despacho como interviniente ad excludendum, adujo que:

- ✓ Que aunque no vivía con su hijo, dado que este laboraba en Ituango, sí le enviaba dinero mes a mes para su manutención y cada que salía a descanso lo visitaba en Puerto Berrio.
- ✓ Que el difunto le proporcionaba mensualmente un monto que oscilaba entre los \$100.000 y \$200.000, dinero con el cual pagaba gastos de su vivienda o surtía su negocio, que después del suceso, su hija Leidy es quien le colabora económicamente.
- ✓ Aclara que NO abandonó el hogar sino que huyó por amenazas, dejándoles un negocio de gasolina, pero al retornar dos años después fue sacado de su vivienda por su esposa.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió PORVENIR S.A. el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que son ciertos aquellos alusivos a la fecha de fallecimiento del afiliado, sus cotizaciones en la AFP, la devolución de saldos, la reclamación efectuada y su pronunciamiento frente a la misma. Advirtió que NO le constaban algunos hechos al tratarse de circunstancias personales de las cuales no ha tenido conocimiento.

Por otro lado, conforme la investigación administrativa, adujo que la señora Castillo no era beneficiaria de la pensión por cuanto no dependía económicamente de su hijo, ya que a la fecha del suceso no convivía con el mismo, sino con sus hijas Magda Liliana y Leidy Archila Castillo, las cuales contaban con un ingreso mensual proveniente de sus labores y aportaban para los gastos del hogar, al igual que la reclamante, pues para el 2015 percibía ingresos de \$450.000 mensuales provenientes de su actividad de “oficios domésticos”, con los que atendía sus necesidades básicas. Aseveró que el causante NO se encontraba laborando para la época de su fallecimiento.

De igual manera señaló que el progenitor tampoco acreditó el cumplimiento del requisito de dependencia, toda vez que NO habitaba con el causante y era propietario de un negocio del cual recibía ingresos como comerciante, que le permitían sufragar los gastos de su grupo familiar, constituido con la señora Lucia Gutiérrez. Reiteró que el causante no laboraba para el momento del deceso, razón por la que NO se podía predicar dependencia y subordinación de quien no recibía ingresos económicos.

Igualmente la señora Rubiela Castillo Avalo se pronunció acerca de la demanda interpuesta por el señor Javier Humberto Archila Reina aclarando que el causante únicamente lo visitaba pero NO le aportaba ningún recurso monetario a este, pues el accionante era propietario de un establecimiento de comercio en Puerto Berrio denominado la Ramada, el cual hace 20 años le provee lo necesario para tener una vida en condiciones cómodas, siendo una de sus empleadas la actual compañera permanente, razón por la que cesó la relación como cónyuges.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida el 29 de marzo de 2019, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ probada la excepción de “inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir” frente al señor Javier Humberto Archila Reina y CONDENÓ a PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a la señora RUBIELA CASTILLO AVALO la pensión de sobrevivientes desde día 25 de noviembre de 2014, en cuantía mensual equivalente al SMLMV, teniendo en cuenta 13 mesadas, calculando un retroactivo que a marzo de 2019, ascendía a \$40.802.267.

Accedió al reconocimiento y pago de intereses moratorios, por cada mesada causada a partir del 12 de abril de 2015, hasta la fecha en que se efectuó el pago de la obligación. Por otro lado, autorizo a la AFP PORVENIR S.A. a realizar los respectivos descuentos en salud, además del valor cancelado a título de devolución de aportes.

Finalmente condenó en costas a la entidad, fijando como agencias en derecho la suma de \$3.000.000.

Dentro del término concedido por la ley, la parte demandada interpuso y sustentó recurso de apelación.

2. ARGUMENTOS

2.1. DEL JUEZ PARA DECIDIR

Consideró que a través de la prueba documental, interrogatorio de parte y testimonios recibidos, se acreditó que el fallecido siempre vivió con su madre, que este no tenía compañera permanente ni hijos. Aceptó que NO se logró establecer el monto percibido por el causante antes de fallecer, quien con antelación tuvo ingresos estables, especialmente en su periodo laboral en Hidroituango, toda vez que para la época de su fallecimiento no tenía una vinculación formal a nivel laboral. Por otro lado, adujo que tampoco se demostró la suma precisa del aporte que daba el causante para sufragar los gastos de su hogar, tampoco se podía esperar la existencia de un recibo, cada factura pagada o producto adquirido pero que sí había quedado claro que la ayuda ascendía a más de un 33%, y que junto con su hermana Leidy, eran los encargados de sostener el hogar, a lo que se sumaban las contribuciones eventuales de la señora Rubiela (demandante) y Magda (hermana del causante).

Con base en ello concluyó que la accionante tenía una dependencia económica relevante respecto del causante, aspecto que NO logró acreditar el progenitor dado que frente a este únicamente se comprobó que poseía un negocio en el cual tenía una casa, además los testigos del mismo eran de oídas y de sus dichos sólo se desprendía que el fallecido era un buen hijo.

Preciso que el hecho de que el causante llevara cierto lapso sin una vinculación formal, no implicaba que NO estuviera realizando ningún trabajo, menos aun si se trataba de una persona que desde sus 13 años laboraba, vivía con su mamá y cumplía con las obligaciones del hogar.

Finalmente accedió al reconocimiento de los intereses moratorios, al considerar que no existía controversia frente al grado de dependencia económica.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN PORVENIR S.A.

Empezó indicando que la pensión reconocida a la señora Rubiela NO contaba con sustento probatorio.

Refiere que todos los testigos fueron de oídas, y mencionó que el señor Luis Álvaro Vélez y su esposa Bifrancy Velásquez, declarantes en este proceso, únicamente conocieron de la situación económica del hogar del fallecido hasta el año 2012, cuando la familia dejó de habitar en la

propiedad que aquellos le alquilaron en Envigado, pasándose a Bello y con ello perdiendo el contacto que tenían, de ahí que NO tuvieran conocimiento de cuál era el aporte brindado por el causante, desconocían si el fallecido laboraba para el año 2014, tampoco conocía sus ingresos ni el aporte real, aducían que *sí le daba* pero que no les constaba, que se lo imaginaban, lo creían o lo habían escuchado.

Que quizás para el año 2012 posiblemente el causante si hubiese ayudado a su progenitora, pero para el año 2014 NO se acreditó absolutamente nada, ni cuánto ingresaba, ni cuánto aportaba al hogar, ni cuánto aportaban sus hermanas, sólo se planteaban supuestos, aspecto en el que recalca que los ingresos del difunto disminuyeron en sus últimos tres meses de vida, aspecto en el que el testigo Duqueiro Velilla manifestó que una carrera de moto taxi podía costar aproximadamente \$1.000 para el momento del fallecimiento, encontrando irracional que unos ingresos como estos, inferiores al mínimo, pudieran sostener un hogar en la suma de \$450.000.

Destaca que los hechos a examinar minuciosamente son los acontecidos en noviembre de 2014, no así tres meses antes, cuando otros eran sus ingresos, aspecto en el que era clara la norma. Que para ese mes el afiliado era moto taxista, la moto la estaban pagando entre él y su madre, resultando ilógico que ahora la progenitora indique que dependía económicamente de él. Aunado a ello, quien más aportaba al hogar era la señora Leidy y Magda, concretamente \$800.000, como se expresó en los folios 71, 72 y 73, la primera con \$600.000 la segunda con \$200.000, resultando curioso que la suma de \$450.000 referenciada en tales documentos como aportes de Rubiela, producto de sus ventas ocasionales en fritanga, ahora se le endilguen al causante, cuando en la casilla de ingresos proporcionados por el afiliado aparecía cero y en el recuadro de si estaba empleado aparecía que no.

Por lo tanto, contrario a lo predicado por el juez de instancia, NO se podía hablar de una dependencia económica de la madre respecto de un hijo que ni siquiera estaba laborando y los únicos ingresos acreditados fueron los de la moto taxi.

En cuanto al testimonio de la señora Luz Adriana, sobrina de la demandante, indicó que esta desconocía si el causante trabajaba para el momento de su muerte, no tenía conocimiento de quien aportaba o cuánto aportaba para este hogar. Tampoco el señor Luis Álvaro presencié la entrega de dinero; sí indicó que el causante le pedía plata prestada para el año 2012, situación irrelevante para el caso. La esposa de aquel testigo igualmente desconoce quién pagaba el arrendamiento en Bello, no sabe lo atinente a los gastos, ni siquiera si el causante laboraba para el momento del deceso.

Que bajo dicho contexto, se reconoció una prestación en atención a las palabras de la reclamante en cuanto a que el aporte del hijo eran de \$450.000, sin existir una sola prueba que genere una certeza, pues ella adujo que se equivocó llenando el formulario, documento que en ningún momento fue tachado de falso, incluso las firmas fueron reconocidas por la actora.

Explicó que la negativa pensional por parte de Porvenir se realizó teniendo en cuenta aquel formulario y la investigación administrativa efectuada por una firma contratada por la entidad, para indagar por la situación real de la familia.

Insiste que hay una carencia de prueba respecto al establecimiento de ese 30% en que el a quo cimentó el fallo, porcentaje a su vez edificado en la simple declaración de parte.

Trajo a colación la sentencia 8336 del año 2016, MP Jorge Mauricio Burgos Ruiz, en la cual, en resumen, manifiesta que sí se prueban otros ingresos de otros miembros de la familia, así no sean parte del proceso, la pensión de sobrevivientes no puede salir adelante, circunstancias que aquí fueron probadas al demostrarse que la hija Leidy pagaba parte de los servicios públicos y el arrendamiento; ahora bien, si tenemos que Javier ayudaba con parte de los servicios públicos y el mercado, era lógico si vivía en ese hogar y debía alimentarse, pero ni siquiera aportaba en el aspecto fundamental del arrendamiento, disfrutando este de la vivienda que alquilaba su hermana.

Finalmente indicó que si los argumentos expuestos eran insuficientes para lograr que la sentencia condenatoria se revirtiera, debía analizarse la procedencia de los intereses de mora, acogiendo el precedente jurisprudencial, concretamente el criterio definido en la sentencia 43602 del año 2013, MP Jorge Mauricio Burgos Ruiz, según la cual dichos intereses NO debían otorgarse de manera automática, tesis complementada en la SL-27561 del 2017, MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo, en la cual se informó que sí se niega la prestación por un correcto apego a la norma, los intereses no podrían salir adelante, siendo ello lo que precisamente aquí sucedió dado que Porvenir se sujetó a lo señalado en la prueba documental para negar esta prestación, de un lado, una manifestación por parte del progenitor donde renunciaba a todos sus derechos, y de otro lado, la declaración expresa por parte de la señora Rubiela según la cual ganaba \$450.000, las hijas le daban \$800.000 y el causante estaba desempleado y *no le daba un peso*, óptica desde la cual, como administradora, NO tenía opción diferente a negar la prestación.

2.3. ALEGATOS

2.3.1. PRESENTADOS POR PORVENIR S.A.

Solicita que se revoque la condena impartida por el juez de primera instancia y en su lugar se absuelva de todas y cada una de las pretensiones incoadas. Expresamente indicó que:

Partiendo de la misma jurisprudencia traída por el señor Juez de primera instancia, es menester en este tipo de litigios, demostrar que la ausencia del afiliado fallecido causó un menoscabo en las condiciones de vida digna de los solicitantes, ya que la ayuda del mismo era periódica, relevante y a todas luces necesaria para conservar dichas condiciones de vida digna, tal como también lo imponen los artículos 164 y 167 del C.G. del P., norma aplicable a la legislación laboral por remisión expresa del artículo 145 del C. P. del T y de la S.S., al imponer esta carga probatoria a la parte demandante.

Y vemos entonces señores Magistrados que, en el caso de autos, la parte actora no logra acreditar lo referido, pues ello no se puede extraer de los testimonios rendidos, ni mucho menos del interrogatorio de parte, que como bien sabemos, es relevante probatoriamente hablando en tanto se logre una confesión por parte del declarante.

Al analizar la situación de la actora frente a su hijo fallecido, se infiere que no había dependencia económica, conforme se probó dentro del trámite procesal de primera instancia, los supuestos aportes brindados por el afiliado fallecido eran simples apoyos de buen hijo de familia, que por sí solos no convierte a la madre en dependiente de su hijo.

Los testigos que se arrimaron al despacho se deben catalogar como de “oídas” no fueron consecuentes en sus dichos, acusaban generalidad y poco conocimiento de las preguntas básicas como: ingresos, gastos personales, ¿cuánto era el aporte para el hogar?, ¿cuál era el aporte para su madre?, ¿en qué destinaban esos supuestos ingresos?

En gracia de discusión, de resultar creíble que el causante aportaba económicamente a su madre, no debe pasarse por alto lo manifestado por la actora y sus testigos al indicar que dentro del núcleo familiar se colaboraban económicamente entre varias personas, sin cuantificarlos y sin determinar a cuánto ascendían los gastos ni aportes en dicho hogar, por lo que es claro que a dicho testigo no le constaba la existencia del aporte.

Circunstancias aquellas que analizadas en el caso de autos nos hacen concluir que la demandante no dependía económicamente del afiliado fallecido.

Mi representada no encuentra conformidad respecto la condena al pago de intereses moratorios, puesto que PORVENIR S.A. no está en mora de reconocer obligación alguna, sino que, de la más absoluta buena fe y en aplicación de las normas pertinentes en materia pensional, considera, en forma razonable, que en el evento de autos no se cumple el requisito de la dependencia económica de padres con respecto al hijo que exige la ley, requisito ineluctable para generar la pensión que se impetra.

Al respecto resulta de suma importancia indicar lo decidido en la sentencia SL 2756 de 2017 emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia.

2.3.2. ALEGATOS RUBIELA CASTILLO AVALO

Indicó que como bien se tenía probado, el señor Javier Humberto Archila Castillo (q.e.p.d) era hombre soltero, laboralmente activo desde la informalidad, y tenía a su señora madre Rubiela Castillo Avalo como única beneficiaria, pues el padre del causante, como quedó probado, no recibió aporte indispensable de parte de su hijo.

Que la negativa de la pensión se cimentó en la NO dependencia económica; empero, una vez evacuadas las pruebas, se comprobó que efectivamente la señora Rubiela Castillo recibía un aporte periódico que resultaba indispensable para su congrua subsistencia de parte del causante, en los términos analizados en la sentencia C-111 de 2006, sin que la misma tuviera que ser absoluta, de acuerdo a lo previsto en las sentencias CSJ SL400 de 2013, SL816 de 2013, SL 2800 de 2014, SL3630 de 2014, SL6690 de 2014, SL14923 de 2014 y SL6390 de 2016 (entre otras cuyos fragmentos cita), de manera que la madre podía percibir ingresos adicionales, pero insuficientes para garantizar la independencia económica.

Que los declarantes informaron al despacho que la demandante en algunas ocasiones vendía comestibles, arreglos, lociones, camisetas, sin embargo, no se probó que esas actividades informales la convirtieran en una persona autosuficiente en términos económicos. Que si bien su hija Magda le colaboraba, el aporte de ella no era periódico, y pudo verse incrementado al momento del fallecimiento de su hermano Javier. Se conoce igualmente por los dichos de los testigos que Leidy además de trabajar estudiaba, en medida de ello, el aporte de esta hija consistía en el pago del arrendamiento, mientras que su hermano aportaba para el mercado y el pago de los servicios públicos. Se conoce igualmente, por información de los testigos, incluso del tercero interviniente, que el joven Javier se dedicaba a prestar desde la informalidad el servicio de transporte de moto-taxi, dado que en los tres últimos meses de vida no sostuvo vínculo laboral.

Que contrario sensu a las conclusiones que motivaron la negativa de la pensión de sobrevivientes por parte de la AFP demandada, la señora Rubiela Castillo Avalo, no era, ni es, una persona financieramente autosuficiente, sino que por el contrario ha dependido del apoyo de los miembros del grupo familiar para su manutención, apoyo que recibía igualmente de su hijo Javier Humberto Archila Castillo.

Que critica el apoderado judicial de la parte demandada la decisión de primera instancia, en lo relacionado con el monto del aporte realizado por Javier, sin embargo ello resulta inane, pues de la auscultación panorámica del álbum probatorio se extrae sin hesitación alguna que el aporte realizado por el causante era indispensable, máxime la débil capacidad financiera de la señora Rubiela, pues no ha contado con un empleo formal. Desde la informalidad ha tratado de obtener recursos que NO le generan independencia económica.

Que de la prueba documental aportada expedida por la demandada, consistente en la relación de aportes del causante, extrajo el despacho que el afiliado fallecido, entre 9 de septiembre de 2013

y el 8 de septiembre de 2014, obtuvo ingresos superiores al \$1.000.000 mensuales. En ese mismo documento se podían observar otras relaciones laborales sostenidas por el causante donde recibía en los meses anteriores mayo a septiembre de 2013 un salario mínimo. Los testigos además informaron que el joven laboraba desde temprana, lo que permite concluir sin sombra de duda que siempre aportó recursos económicos para el sostenimiento de su madre

Colofón de todo lo anterior, quedó debidamente acreditado al interior del plenario que la señora Rubiela Castillo Avalo, en su calidad de madre sobreviviente del causante señor Javier Humberto Archila Castillo, cumple con las condiciones fácticas y de derecho, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que este último dejó causada.

Que el artículo 61 del *Código de Procedimiento Laboral* les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo, todo lo cual fue observado por el juzgador de instancia.

De esta manera solicita al *ad quem* desestimar los argumentos expuestos en el recurso de alzada por la sociedad administradora demandada, y se confirme la decisión adoptada por el juzgado.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si la señora Rubiela Castillo Avalo es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión del deceso de su hijo Javier Humberto Archila Castillo, estableciendo si de los diferentes medios de prueba es dable concluir que aquella dependía económicamente del causante.

De igual manera, se establecerá si es procedente ordenar los intereses moratorios de que trata el art. 141 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, conforme lo regulado en el art. 69 del CPT y la SS, respecto del progenitor del causante, se analizará la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta dado que la misma fue totalmente adversas a las pretensiones de aquel y no fue apelada.

4. CONSIDERACIONES

Antes de adentrarnos en el análisis de la controversia suscitada es preciso advertir que ninguna discusión gravita en torno al hecho de que el causante dejó satisfecho los requisitos para que quien acreditase la calidad de beneficiario, accediera a la pensión de sobrevivientes.

Aclarado lo anterior, tenemos que para la época del fallecimiento del causante, 25 de noviembre de 2014, se encontraba vigente la Ley 797 de 2003, que en un principio exigió que la dependencia fuera total y absoluta, expresiones que, en el año 2006, mediante sentencia C-111, fueron declaradas inexecutable y que posteriormente dieron lugar a múltiples pronunciamientos por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, oportunidades en las que se precisó que la configuración de la dependencia, ante la ausencia de una definición legal, se debía analizar a la luz de la lógica, lo que presuponía simplemente la necesidad de una persona respecto del auxilio de otra, situación que no se desvirtúa por el hecho de que la ayuda al progenitor sea parcial, pues la exigencia legal no supone la dependencia absoluta, tornándose admisible que los padres puedan depender de otros ingresos, pues existen ayudas parciales o complementarias determinantes para la subsistencia de una persona.

Quiere esto decir que NO se precisa un estado de indigencia para que se tenga derecho a la pensión, sobre todo si analizamos el sistema económico colombiano, en donde los ingresos de las clases menos favorecidas son exiguos y las necesidades a cubrir muchas. Por ello, la dependencia económica no pugna con la existencia paralela de otras ayudas, siempre y cuando éstas no conviertan a quien las recibe en autosuficiente, pues en éste caso si desaparecería la dependencia respecto de las demás ayudas.

Recordemos que la finalidad de la pensión de sobrevivientes no es otra que sustituir en parte, los ingresos del causante que eran destinados no sólo para su sostenimiento sino para el de su grupo familiar, el que resulta desprotegido ante su fallecimiento, es decir, suplir la ausencia repentina del apoyo económico para que no se afecten las condiciones mínimas de subsistencia.

En éste punto es importante referenciar lo que en torno al tema del mínimo vital a razonado la Corte Constitucional, que en sentencias como la T-581A/11 ha dicho que tal concepto debe ser evaluado desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades mínimas del individuo, evaluándose las circunstancias de cada caso y haciendo una valoración que se encamine más hacia lo cualitativo que a lo cuantitativo, verificándose que la persona tenga las posibilidades de disfrutar de la satisfacción de necesidades como la alimentación, el vestuario, la salud, la educación, la vivienda y la recreación, como mecanismos para hacer realidad su derecho a la dignidad humana.

Bajo este sucinto recuento respecto a la noción de dependencia, descendemos al análisis del caso en concreto.

Nos encontramos ante unos progenitores, con domicilios disímiles, que con ocasión del fallecimiento de su hijo Javier Humberto Archila Castillo, quien contaba con 24 años el día que falleció por causas de origen común, solicitaron ante Porvenir S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, prestación que fue negada por la entidad accionada el 15 de junio de 2015, argumentando que no dependían económicamente del causante.

Por su parte el juez mencionó que, aunque NO se estableció el monto del aporte por parte del fallecido, era claro que todos los miembros del hogar contribuían, analizando las dinámicas económicas del hogar en los últimos años, conclusión ampliamente reprochada por el recurrente.

Ante de detenernos en ello, se torna imperioso entender el contexto de la situación. Procedemos entonces a destacar algunos puntos que no sólo refleja con unicidad el material probatorio, sino que además NO comportan objeto de controversia.

Los aquí accionantes, sostuvieron una relación sentimental años atrás. De esta relación tuvieron tres hijos, Magda, Leidy y el causante Javier Humberto Archila Castillo, último nacido el 14 de abril de 1990 en Puerto Berrio, Antioquia, tierra natal de aquel grupo familiar. Cuando este tenía 13 años, por motivos que desconoce la Sala la pareja se separó. La progenitora quedó al cuidado de sus hijos y afrontaron algunas situaciones económicas difíciles, razón por la que el hijo comenzó a ejercer todo tipo de actividades económicas informales en aras de contribuir con los gastos del hogar, dígame en una gasolinera del pueblo, en supermercados, vendiendo comida, manejando taxi, entre otras. Aproximadamente a sus 20 o 21 años, el afiliado cambió su domicilio, junto con su madre comenzaron a habitar en Envigado, lugar donde su hermana Leidy había alquilado una casa. Aquella, años atrás había dejado el hogar materno (entiéndase Puerto

Berrio) para estudiar en Medellín, inicialmente habitó con varios primos. Quienes arrendaron el inmueble fungieron aquí como testigos, dado que además del vínculo contractual, forjaron una amistad.

El núcleo familiar, conformado por la madre y sus dos hijos, Leidy y Javier, permanecieron casi dos años en Envigado, pues luego se trasladaron al Municipio de Bello. Magda, la otra hermana del causante, formó su propio hogar y siempre permaneció en Puerto Berrio, igual que el progenitor, quien por demás era propietario de un establecimiento de comercio llamado la Ramada, a orillas del río donde se vendía tintos, aromática y cerveza. Este vivía en el segundo piso de tal local.

Ahora, conforme se aprecia en la historia laboral del causante (fls 13 y 18), para agosto de 2013 laboraba en Velotax, antes en un supermercado, después en el Consorcio CCC Ituango, razón social a través de la cual efectuó aportes entre septiembre de 2013 y agosto de 2014, lapso en el que percibió un salario que incluso duplicaba el mínimo de la época (\$616.000).

El problema gravita en que el afiliado falleció en noviembre de 2014, por lo que la tesis de defensa de la administradora se centró en la imposibilidad de que una persona que llevaba tres meses desempleada brindara un auxilio económico determinante a su progenitora al momento de la muerte. Y aunque ello lo recalca el apoderado de Porvenir S.A. en el recurso de alzada, reconoce que para la data del deceso el causante sí ejercía una actividad económica, sólo que de manera informal, era moto-taxista en su pueblo natal, encontrándose en Puerto Berrio cuando perdió la vida en una balacera.

Afirma la madre en el interrogatorio absuelto que ambos se encontraban *paseando* en el lugar, incluso confiesa que como era época cercana a la navidad y primeras comuniones, se aprovechó para hacer manualidades por encargo, recibiendo \$1.000 por unidad, añade que su hijo se aburrió de estar encerrado en Ituango, pues sólo podía salir unos días por mes, renunciando a ese trabajo, encontrándose en Puerto Berrio, habiendo adquirido una moto por la que pagaba una cuota mensual de \$200.000, precisamente para poder trabajarla.

Nótese hasta aquí como las dinámicas familiares se encontraban coyunturalmente modificadas debido a la reciente renuncia del causante.

Y ahí es donde el recurrente llama la atención destacando que, a voces de la norma, la dependencia debe ser acreditada al momento de la muerte, y no uno, dos o tres meses antes. Y

ello es cierto, pero tampoco se puede llegar a desconocer el contexto de cada caso, es decir, ni llegar al extremo de negar una pensión de sobrevivientes porque el pagador regular de los gastos, por ejemplo, fue despedido días previos a su deceso o, por el contrario, reconocerla porque justo ese mes, quien nunca aportó consiguió empleo y contribuyó al hogar. Por ello los roles regulares de cada miembro deben ser evaluados integralmente.

En este contexto, descendemos al análisis de la prueba testimonial. Aquel medio estuvo conformado por la declaración de cinco testigos, siendo tales las señoras LUZ ADRIANA CASTILLO MAZO (sobrina), BIFRANCY VELASQUEZ PATIÑO y los señores LUIS ALVARO VELEZ CIFUENTES (arrendador), DUQUEIRO EMILIO VELILLA TORRES y RICARDO ANTONIO MURIEL SEGURA, los tres primeros testigos solicitados por la madre, los restantes dos por el padre.

Ocupémonos inicialmente de examinar las versiones de la señora BIFRANCY VELASQUEZ PATIÑO y el señor LUIS ALVARO VELEZ CIFUENTES, esposos entre sí, y quienes para la época de los hechos habitaban en el Municipio de Envigado; este último aclaró que conoció a Magda porque es amiga de su esposa, ella vendía mercancía, ropa y “nos involucramos con la familia, nos la presentó, y como tenía una propiedad en Envigado ella le dijo que se la alquilara a su madre”, ahí conoció a la demandante. Que debido a la situación trataron de colaborarles, y así se fueron enterando de todo. Que siempre han tenido una relación muy fuerte, *o ellos nos visitan, nosotros los visitamos*.

Así las cosas, tenemos que los testigos inicialmente conocieron a Magda, (hermana del causante), posteriormente a Leidy, su hermano y madre cuando aproximadamente en el año 2011 comenzaron a vivir en una casa de su propiedad, cuyo canon era asumido por Leidy. Se forjaron lazos de amistad y destacan la pujanza del causante y su madre, pues ejercían diversas actividades para obtener recursos, incluso les permitieron poner a las afueras del inmueble un negocio de venta de comestibles; reconocen que en ocasiones también le permitían a la señora Rubiela limpiar su casa, y al joven Javier trabajar en el taxi, por ejemplo, para hacer un remplazo, a quien varias veces le llegó a prestar plata.

Evidentemente su conocimiento de esa colaboración mutua entre los tres miembros del hogar para lograr su congrua subsistencia, era más perceptible durante los años 2011 a 2013, precisamente en razón de esa vecindad. Todos contribuían, la hija para pagar el arriendo, la

madre y el causante obteniendo recursos para sufragar la alimentación y los servicios, pero no conocen cifras de esos costos, ni de los ingresos, y cuando lo hacen simplemente especulan. A partir de ahí y hasta el año 2014, lo percibido se circunscribía a ese contacto que mantuvieron en razón de la amistad o las visitas que tenían. Es por ello que nada les podía constar de lo acontecido en Puerto Berrio durante los últimos meses de vida del causante, aunque si aceptaron que se enteraron que aquel consiguió una moto para trabajarla como moto-taxista, sin dar mayores detalles. Refieren que como 10 días antes del fallecimiento de Javier Humberto, asistieron al cumpleaños de Rubiela en Bello, y es ahí cuando el señor Luis Álvaro supone que el causante estaba de permiso bajo el matiz que el afiliado aun laboraba en Ituango, la señora Bifrancy sí aclara que *hacía poco se había retirado de Ituango*, pero no sabe a qué se dedicó después de eso. Es decir, desconocían los detalles de esos recientes cambios.

Abordemos ahora a la testigo LUZ ADRIANA CASTILLO MAZO. Reconoce que es sobrina de la demandante, consecuencialmente prima del causante, parentesco por el cual fue tachada. Empero, en su testimonio no se vislumbró ninguna intención de falsear la información entregada, la misma fue coherente, conteste, incluso acepta los asuntos frente a los cuales no tiene conocimiento. Señala que el causante desde muy pequeño trabajó para ayudar con las necesidades de la casa, como desde los 13 o 14 años, cuando los padres se separaron, que con lo que ganaba le colaboraba a la madre, pero no para pagar una y otra cosa en específico, sino todo en general, es decir, daba un aporte para cubrir cualquier gasto, no sabe cómo se distribuía ese dinero. Su tía también se ayudaba con ventas de cualquier cosa, lociones, camisas, comida, especialmente cuando se murió el hijo para suplir esa entrada. Desconoce la cifra exacta del valor de los servicios, el mercado o el arriendo. Sabe que el causante tuvo una moto cuando vivía en Puerto Berrio para transportar gente, pero no sabe cuánto se ganaba por ejercer tal actividad.

Fueron estos los testigos allegados por la señora Rubiela Castillo.

Ahora, NO necesariamente quienes son llamados a declarar deben informar la cantidad exacta no sólo de los gastos del hogar sino además el porcentaje con el que cada uno de sus miembros colaboraba; generalmente el conocimiento se remite a lo que perciben o lo que las personas que habitaban en una casa les cuentan, debido a la cercanía con algunos de sus miembros y el constante contacto con dicha familia (dígase por razones de amistad, vecindad o incluso consanguinidad) contacto que no necesariamente se debe circunscribir a una visita permanente dentro del hogar, dado que admisible es que precisamente de esas conversaciones derivadas de encuentros frecuentes, se propicien diálogos donde se ventilan aspectos de la vida familiar.

Incluso generalmente las inexactitudes dan cuenta de versiones libres, espontáneas, que refieren únicamente lo que les consta, aceptando aquellos asuntos de los cuales no tienen conocimiento, y ello es razonable pues en cuestiones relacionadas con dinero, personas ajenas al núcleo, por regla general, no tienen precisión en cuanto a dichos aspectos.

Así las cosas, aunque de las versiones de los testigos NO se extrae el monto del aporte, lo cierto es que ello no desvirtúa su existencia. Y en todo caso reflejan la existencia de un núcleo conformado por tres personas, donde todos ejercen actividades económicas, informales o no, de las que derivan ingresos.

Y en este aspecto resultan más ilustrativos los testigos traídos por el progenitor, por lo menos de cara a la actividad económica ejercida por el causante durante los últimos meses de vida.

De un lado, encontramos al señor RICARDO ANTONIO MURIEL SEGURA, vive en Medellín hace 25 años, reconoce que el padre del causante, con quien tiene una amistad de *toda la vida*, tiene un negocio en Puerto Berrio, lugar de donde es originario, por lo que ha visitado el establecimiento varias veces, incluso lo describe y señala que eso le daba para *medio subsistir* al reclamante, especialmente cuando había *subienda de pescado*, había más clientes, se vendía aguardiente y cervezas. Conoce al causante y sabe que vivía con la madre para el momento del fallecimiento, que antes trabajaba en Hidroituango y ayudaba al padre con \$100.000 o \$200.000 mensuales, posteriormente como moto- taxista en Puerto Taxista, descendiendo las ayudas a \$20.000, \$30.000 o \$40.000 dependiendo de cómo le fuera, que lo sabe porque lo veía y también se lo contaban amigos en común. Desconoce ingresos puntuales del causante, pero advierte que aquel era el medio de transporte usual y más económico en el pueblo.

De otro lado, declaró el señor DUQUEIRO EMILIO VELILLA TORRES. Conoce al causante y su padre porque en Bavaria era distribuidor de cerveza y le tocaba visitar el Municipio de Puerto Berrio un promedio de 6 veces por mes, de las cuáles dos o tres le vendía cajas de cerveza al afiliado fallecido, en cada ocasión de una a tres cajas que eran pagadas y pedidas, directamente o por teléfono, por el causante, a quien veía especialmente cuando coincidía la entrega con los días de descanso en la época que laboró en Hidroituango. Señala que este también fue moto-taxista y que cada carrera costaba \$1.000. No conoció a la madre del joven Javier.

Los dichos de aquellos resultan ilustrativos en cuanto a que, contrario a lo esbozado por la entidad, para la época del deceso el causante si ejercía una actividad económica, cosa diferente

es que fuera informal y que de ella extrajera ingresos fluctuantes. Pero en todo caso, ello sólo denota esa necesidad de proveer el hogar.


Ciertamente, y así lo reconoce el fallador, el proceso es huérfano de cifras, pero pierden la relevancia que destaca el recurrente cuando se avizora que la madre es una persona que nunca ha gozado de un trabajo formal, ella acepta y en ello coinciden los testigos, que ejerce cualquier actividad, dígase en ventas o de limpieza, para proveer el hogar, dado que los recursos de los hijos con los que habitaba, Javier y Liedy, eran precarios, pero aun así, lograban entre los tres, sufragar la alimentación, los servicios y el arriendo. Fueron estas las dinámicas familiares que pervivían de años atrás, un poco cambiantes esos dos últimos meses de vida, dado que el causante pasó de recibir unos ingresos seguros en una empresa, o rebuscársela como independiente en su pueblo de origen, pero siempre acompañado de su madre.

El análisis de la Sala podría variar si la progenitora se tratase de una persona que tuvo acceso a una educación, y consecuentemente un trabajo formal, evento en el que sería necesario establecer cifras para determinar la relevancia del aporte del hijo. Pero ni lo uno ni lo otro ocurre. Incluso pretensioso sería identificar con precisión los ingresos de la madre y su hijo por la llana razón que eran fluctuantes. Los de la demandante provenían de la actividad que resultara, del perfume o la camiseta que vendiera, de la casa que limpiara, del número de empanadas que hiciera, de la cantidad de arreglos navideños o de primera comunión que le encargaran. Similar razonamiento ocurriría frente al causante, y cabría preguntarnos ¿cómo establecer la cantidad de personas que transportaba por día?, evidentemente es un dato que NO habría de esclarecer un testigo, mucho menos le era dable al recurrente aseverar que los ingresos de éste eran inferiores al mínimo legal.

Incluso una barrera se visualiza cuando se pretende obtener de cada testigo una información integral, por denominarla de alguna manera, cuando solamente podrían hablar de lo acontecido dígase en Envigado, Bello o Puerto Berrio. Y precisamente ello es lo que se avizora en sus dichos. Se aprovecha el recurrente de tal fraccionamiento y aisladamente analiza cada uno de los dichos de los deponentes, sin concatenarlos y examinar la prueba en su conjunto, destacando su ignorancia frente a las cifras, cuando ello sólo denota veracidad en su declaración, máxime, si para el caso puntual, por las especiales circunstancias del mismo, es difícil su esclarecimiento.

Ahora, NO pierde de vista la Sala la peculiar información plasmada en el formulario que entregó la demandante al momento de elevar la correspondiente reclamación (fl. 27 archivo 12), pues allí se anota que el causante nada aportaba al hogar, así:

Ingresos del núcleo familiar al momento del fallecimiento del afiliado(a)			
Descripción	Ingresos mensuales (\$)	Origen de los ingresos	Observaciones
Generados por la madre	450.000		
Generados por el padre	0		
Aportados por el afiliado			
Aportados por hermanos del afiliado	800.000		
Total	1.250.000		



porvenir
solo hay uno
porvenir OFICINA MEDELLIN CENTRO
11 FEB 2015
RECIBIDO

A00-14 F-01-BF-RC-36 V.1.0

Se nota sorprendida en el interrogatorio absuelto cuando es indagada por ello. Refiere que NO fue quien diligenció el formulario, sino el funcionario de la entidad, pero sí reconoce su firma. Insiste que ella NO tenía la capacidad de generar unos ingresos tan altos.

Bajo los datos aludidos, en gracia de discusión, NO resultan comprensibles las razones por las cuales Porvenir S.A. predica una autosuficiencia de la reclamante cuando matemáticamente sus ingresos le impedirían, y por mucho, asumir los gastos del hogar.

Ahora, realmente aquel dato parece tratarse de una imprecisión, máxime si otra cosa revela la prueba testimonial en cuanto a la existencia de la ayuda, que por demás sí reconoce la entidad en la investigación en mención.

RESULTADO FINAL DE LA INVESTIGACIÓN

De acuerdo a verificación se confirma que los documentos anexos a la solicitud son auténticos y corresponden a sus titulares.

Circunstancias de Fallecimiento: el Sr. Javier Humberto Archila Castillo falleció de manera violenta en Noviembre 25 de 2014, cuando se encontraba visitando a su familia en Puerto Berrio (Ant.), estaba con un grupo de amigos en un establecimiento comercial, se presentó cruce de disparos los cuales le provocaron varias lesiones, por tal motivo fue trasladado al Hospital E.S.E. La Cruz de Puerto Berrio Antioquia donde llegó sin signos vitales.

Información laboral: el afiliado llevaba un mes sin labor, siendo su última labor desempeñada como encargado de bodega en la Represa de Ituango, durante un año.

Núcleo Familiar: el Sr. Javier Humberto Archila Castillo no tenía matrimonio, ni uniones maritales de hecho vigentes al momento de su deceso; tampoco hijos; vivía con la Sra. Rubiela Castillo Avalo (madre), a quien le realizaba aportes económicos, debido a que la reclamante realiza oficios domésticos de manera esporádica y al momento del deceso de su hijo devengaba cerca de 450.000.00 pesos, es de estado civil soltera, no recibe mesada pensional alguna (sin acceso a régimen especial), no figura como propietaria de establecimientos comerciales, ni inmuebles, sufragó sus gastos con ayuda de sus dos hijas las Sras. Magda Liliana y Leidy Archila Castillo de 37 y 26 años ambas empleadas quienes al momento del siniestro del afiliado le realizaban aportes al grupo familiar de aproximadamente 800.000.00 pesos y del Sr. Javier Humberto Archila Reina, además de su labor realizando oficios domésticos.

Los padres del afiliado, Sres. Javier Humberto Archila Reina y Rubiela Castillo Avalo no vivían juntos al momento del deceso del afiliado; puesto que el Sr. Javier Humberto Archila Reina convive en unión libre con la Sra. Lucía Gutiérrez hace 08 años, no percibe mesada pensional (sin acceso a régimen especial); es propietario del lote situado en la Calle 13 con Carrera 1 Barrio el Puerto en Puerto Berrio (Ant.), sufragó sus gastos con los ingresos percibidos de un establecimiento comercial dedicada a la venta de licor que administra en su lugar de domicilio. Al reclamante le reporta un establecimiento comercial ante Cámara de Comercio como persona natural con estado de matrícula cancelado de 2011. Se anexa copia de resultado.

(Folio: 01)

Referencias: las Sras. Hermencia Archila con N° 314 822 99 44, Gloria Estela Archila con celular 310 468 74 52, Luz Elvia Tamayo con abonado 312 216 50 89 y Francy Velázquez con abonado celular 301 522 05 04 (tía, prima, vecina y amiga del afiliado respectivamente), se corrobora la información anterior.

Afiliación a Salud: a través de gestión se valida que el Sr. Javier Humberto Archila Castillo reportaba afiliación a salud en la EPS subsidiada Comfama Antioquia como cotizante; sin beneficiarios a cargo desde 15/10/2014. En cuanto a los reclamantes, se valida que reportan afiliación a salud en la EPS subsidiada Comfama Antioquia ambos como cabeza de familia, él desde 02/08/2012 y ella 01/05/2012.

Clasificación: NEGATIVO

Análizados los documentos presentados, las consultas y validaciones practicadas; se concluye que la información del expediente es CONFIABLE y se puede establecer que no se encontró la existencia DE BENEFICIARIOS diferentes de los registrados en el presente informe.

La firma investigadora utiliza las expresiones *realizaba aportes económicos* para referirse al causante, incluso sólo indica que llevaba un mes desempleado.

Y si fuese sólo un mes, ¿sería justo desconocer 10 años de esfuerzo del causante para sacar a su madre adelante? He ahí la importancia del esclarecer el contexto de las dinámicas económicas del núcleo familiar que allí no fueron plasmadas.

Parece pues que se maximizan unos datos y minimizan otros, acomodándose la información, pues reconoce, pero NO establece, el monto aportado por el difunto. Pero al margen de lo anterior, una gran falencia se avizora en cuanto a que no anexó a tal reporte cada una de las cuatro declaraciones recibidas para efectos de corroborar la veracidad de las conclusiones a las que arribó ese tercero.

En este orden de ideas, esta Magistratura acompaña los razonamientos efectuados por el juzgador en primera instancia en cuanto a que se logró establecer que el señor Javier Humberto Archila Castillo siempre habitó en el hogar materno, tuvo diversos empleos, formales e informales, con la finalidad de obtener ingresos para contribuir a los gastos del hogar, dígame en alimentación o servicios, evidenciándose una dependencia parcial, pues sólo lograba satisfacerse la totalidad de gastos con la sumatoria de los esfuerzos de cada miembro. Ilusorio es pensar que se vive en dignas condiciones cuando unos ingresos fluctuantes de la reclamante, NO alcanzarían a cubrir los gastos; en razón a aquello la pensión pretendida se coinvierte en necesaria para mantener el equilibrio en la cotidianidad de ese núcleo familiar. Y es que la dependencia económica exigida por la ley para que un padre o madre adquieran la pensión de su hijo, tal y como se dijo en precedencia, no descarta que el peticionario pueda recibir un ingreso adicional, ya sea fruto de su propio trabajo o actividad o de otros hijos que colaboran, como sucede en este caso, siempre y cuando éste no lo convierta en autosuficiente económicamente, autosuficiencia que en parte alguna se avizora, ni aun partiendo del supuesto de la veracidad e integralidad de los hallazgos de la investigación.

Así pues, el aporte que la demandante percibía de cada hijo, le permitía alcanzar una vida en condiciones dignas.

Conforme el análisis que precede, carecen de veracidad sendas afirmaciones del recurrente, ya que:

- Menciona que dos testigos perdieron contacto con la familia desde el año 2012 por lo que nada sabían de lo acontecido en el 2014, aseveración alejada de la realidad y de las

palabras de tales declarantes, quienes refirieron que mantuvieron contacto permanente con el núcleo tras su cambio de domicilio de Envigado a Bello, incluso asistieron a eventos significativos como el cumpleaños de la madre y el velorio del hijo.

- Señala que de acuerdo a lo indicado por el señor Duqueiro Velilla una carrera de moto taxi podía costar aproximadamente \$1.000 para el momento del fallecimiento, encontrando irracional que unos ingresos como estos, inferiores al mínimo, pudieran sostener un hogar en la suma de \$450.000. Empero, aunque comportan especulaciones del apoderado, perfectamente admisible sería su obtención si cada día del mes el causante hiciese 15 carreras, viables atendiendo las máximas de la experiencia.
- Arguye que a voces de lo expuesto en el interrogatorio, la demandante estaba ayudándole a pagar la moto al causante. En parte alguna ello se indicó, acomoda sus palabras ya que sólo reiteró que ayudaba a su hijo a cubrir los gastos del hogar, entre los que se encontraba la cuota de la moto, haciendo lo que resultara, para esa época, arreglos navideños.
- Expone que la investigación administrativa, indagó por la situación real de la familia. Sin embargo, ello NO es lo que se extracta del documento.
- Indica que si el progenitor renunció a recibir la devolución de saldos, es porque NO era beneficiario de la pensión. Empero, tal renuncia puede provenir de múltiples causas, y si nada se indagó sobre ello, no puede efectuar tal suposición.

Igualmente le asiste razón al fallador en cuanto a la negativa del derecho frente al señor JAVIER HUMBERTO ARCHILA REINA, progenitor del causante. Recuérdese que desde la aludida investigación, y en ello son coincidentes los testigos, aquel era propietario de un negocio en el que comercializaba cerveza, aromática y tinto, ubicado a orilla del Río Magdalena, frecuentado por pescadores. Se desconoce el monto de sus ingresos y egresos. Lo que si refieren quienes declararon en favor de sus intereses, era que el causante siempre le ayudó económicamente, con \$100.000 o \$200.000 mensual mientras laboró en Ituango, y con sumas fluctuantes cuando fue moto-taxista en Puerto Berrio. El otro deponente indica que mensualmente le compraba cajas de cerveza para surtir el negocio del padre.

Podríamos incluso partir de la veracidad de aquellas cifras, pero por sí solas NO tendrían la vocación de cimentar una condena, pues nada se indicó frente a las condiciones económicas de este peticionario, ni siquiera se esclareció con quienes vivía. Por el contrario, los testigos de la progenitora dejan entrever que el negocio era prestante y conocido del pueblo. Incluso, la reclamación realmente sólo la elevó la madre, sólo que diligenció los datos del padre, dado que le fueron solicitados.

No es pues necesario entrar en disquisiciones adicionales frente a este punto.

INTERESES MORATORIOS

Sabido es que al tenor de lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales.

Tal y como lo refiere el recurrente, inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, en atención a una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas, bien sea porque tuvieran respaldo normativo o porque su postura proviniera de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le hubiese dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Bajo este contexto, la Sala analizó el contenido de la misiva expedida a través de la cual Porvenir S.A. negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los peticionarios, claro está, soportada en los hallazgos de la exigua investigación, encontrando que si bien la misma no se ajusta a la realidad, lo cierto es que se basó en los conceptos y/o datos errados que en su momento expuso la firma investigadora, de alguna manera, con la aquiescencia de la reclamante al suscribir unos formularios en los que se nada se diligenció en la casilla donde se debía anotar el monto de los aportes del afiliado. Ello aunado a la dificultad real que representó el esclarecimiento del derecho en cabeza de la madre, no sólo por los radicales cambios que se presentaron en los últimos meses de vida del causante, sino además porque tanto aquel como la señora Rubiela Castillo percibían ingresos fluctuantes, esclareciéndose la procedencia del derecho sólo en el trámite de esta acción, tras un análisis más garantista y profundo de todas las circunstancias ya examinadas.

Así las cosas, no se aprecia que la negativa haya sido caprichosa, sino que correspondió, como se dijo, a una desafortunada intelección respecto del formulario suscrito por la actora. Se

revocará pues la condena en este punto, absolviéndose a la entidad del otorgamiento de los intereses deprecados.

No obstante, es procedente ordenar el reconocimiento de la **INDEXACIÓN** de las sumas adeudadas, atendiendo que efectivamente este dinero no entró ni ha entrado al patrimonio de la demandante y que cuando lo haga, por efectos de inflación, el mismo estará envilecido o desvalorizado. Por ello, la entidad demandada deberá indexar el retroactivo de la pensión de sobrevivientes adeudado al momento en que proceda a realizar el pago real y efectivo de la obligación, tomando para ello el valor del IPC certificado por el DANE, el índice inicial será el aludido IPC vigente a la fecha de causación de cada mesada, y como índice final el IPC vigente al momento del pago. Aplicando la siguiente fórmula: *Indexación = índice final/ índice inicial x capital – capital*.

En los términos expuestos se CONFIRMARÁ PARCIALMENTE la decisión objeto del recurso de alzada en cuanto al reconocimiento de la pensión, revocándose la condena atinente al pago de los intereses moratorios.

No se condenará en costas en esta instancia a la entidad recurrente, pues tuvo éxito parcial en el recurso.

4 DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 29 de marzo de 2019 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **RUBIELA CASTILLO AVALO** y el señor **JAVIER HUMBERTO ARCHILLA REINA** identificados con la cedula de ciudadanía Nro. 21.929.563 y 71.181.576 respectivamente, contra **PORVENIR S.A.**, conforme las razones expuestas en la parte motivan de esta providencia.

SEGUNDO: se **REVOCA** el numeral cuarto del fallo y en su lugar se **ABSUELVE** a la entidad del reconocimiento y pago de los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, administradora que deberá **INDEXAR** el valor del retroactivo que se cause en cumplimiento de esta sentencia, a la fecha efectiva del pago de la obligación.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCIA GARCIA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Proceso:	ORDINARIO LABORAL- apelación sentencia
Demandantes:	RUBIELA CASTILLO AVALO y JAVIER HUMBERTO ARCHILA REINA
Demandado:	PORVENIR S.A.
Radicado No.:	05001-31-05-014-2017-00105-01
Tema:	pensión de sobrevivientes – intereses moratorios
Decisión:	CONFIRMA PARCIALMENTE
Fecha de la sentencia:	14/07/2023

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 17/02/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario